



[Versión imprimible](#) | [Suscripción gratuita](#) | [Números anteriores](#)

también disponible en [francés](#), [portugués](#) e [inglés](#)

MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Boletín Mensual - Número 180 - Julio de 2012

NUESTRA OPINIÓN

- **Rio+20: el poder corporativo sin límites**

MÁS ALLÁ DE RIO+20

- **Continuar con nuestras luchas**

Diferentes procesos celebrados paralelamente durante Río + 20 muestran los intereses opuestos de corporaciones y gobiernos, por un lado, y de movimientos sociales, organizaciones y redes activistas, por otro lado. La Cumbre de los Pueblos representó un avance al analizar, proponer y construir colectivamente, una agenda común para más allá de Río +20.

COMUNIDADES Y BOSQUES

- **Asesinatos en el mundo entero – el precio del acaparamiento de tierras**

Un nuevo informe de Global Witness revela la violencia creciente, las violaciones de derechos humanos y los asesinatos que suscita el incremento de la competencia por tierras y bosques

- **Camboya: primer seguro de riesgo político para un proyecto REDD**

Por primera vez en la historia, un proyecto REDD ha obtenido una póliza de seguro contra riesgos políticos. Dicho seguro, cubierto por la agencia financiera para el desarrollo OPIC, dependiente del gobierno de Estados Unidos, protegería 64.318 hectáreas de bosque. Pero, en realidad, el seguro protege a los inversores extranjeros contra la posibilidad de que Camboya reglamente los proyectos REDD.

- **El Salvador: repudio a la preparación para REDD+**

El gobierno de El Salvador presentó un documento por el que muestra que está “preparado para participar en los sistemas de incentivos financieros para REDD+ (R-PP). Organizaciones sociales y de académicos de El Salvador expusieron públicamente los argumentos para su repudio al R-PP.

- **Malasia: la represa de Baram inundaría aldeas indígenas para provecho de la minería en Borneo**

Varias aldeas y comunidades tradicionales quedarían inundadas, y el ecosistema fluvial se vería afectado, si se construyera en Borneo la represa de Baram, para beneficio del gigante minero australiano Rio Tinto.

- **Nigeria: un proyecto de plantación de cacao amenaza los bosques intactos de los Etara y los Ekuri-eyeyeng**

La reserva de bosque habitada por las comunidades Etara y Ekuri-eyeyeng puede desaparecer, debido a la plantación industrial de cacao de la Southgate Cocoa Produce Limited, vinculada a la compañía británica Armajaro Trading Ltd.

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- **Filipinas: la compañía A. Brown se apodera de las tierras del pueblo indígena Higaonon para plantar palma aceitera**

Una Misión de Inspección Internacional (MII) descubrió que la compañía A. Brown Inc. comenzó a plantar palma aceitera en la tierra de los Higaonon, en el sur de Filipinas, sin haber obtenido autorización para operar. La MII pidió una investigación sobre violaciones de los derechos humanos de los Higaonon, que incluirían el asesinato y el arresto ilegal de agricultores, incendio de casas, destrucción de plantíos, acoso y amenazas de muerte.

- **Gabón: resistencia al acaparamiento de tierras de Olam para plantar palma aceitera**

Alerta social contra la concesión de grandes extensiones de tierras ancestrales a una empresa para establecer plantaciones de palma aceitera.

- **Chile: campaña contra la expansión forestal**

Acción contra una nueva ofensiva de las empresas forestales que buscan duplicar los más de 3 millones de hectáreas plantadas con monocultivos de eucaliptos y pinos, tratando de anexar las tierras de campesinos chilenos y comunidades Mapuche.

PUEBLOS EN MOVIMIENTO

- **Campaña mundial para dismantelar el poder corporativo**
- **Mirando al futuro: reforma agraria y defensa de la tierra y el territorio**
- **Campaña contra FELDA, gigante del aceite de palma**
- **La compañía minera Rio Tinto gana la medalla de oro del “maquillaje verde” 2012**

RECOMENDADOS

- **“El lado oscuro de los acuerdos de inversión”**
- **“Madera caída del bosque tropical: una opción ambientalmente sana y socialmente justa para producir madera”**

NUESTRA OPINIÓN

- Rio+20: el poder corporativo sin límites

Durante la conferencia Rio+20, hechos relacionados con el evento como la expulsión de un activista mozambiqueño y la realidad que afecta a las poblaciones locales, que sufren a manos de las grandes empresas patrocinadoras del evento oficial, muestran que el poder corporativo no tiene límites.

El periodista mozambiqueño Jeremías Vunjanhe llegó a Brasil el 13 de junio para participar en la Cumbre de los Pueblos- actividad organizada por redes y movimientos sociales brasileños e internacionales antes y después de la conferencia Rio+20 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- y en el aeropuerto la policía federal brasileña le impidió entrar al país y lo deportó a Mozambique.

Jeremías y su organización Justicia Ambiental- Amigos de la Tierra Mozambique- han apoyado incansablemente a las comunidades mozambiqueñas, afectadas por las actividades nefastas de Vale- una corporación minera transnacional con sede en Brasil y una de las principales del mundo. Jeremias ya había sufrido amenazas e intimidaciones debido a su trabajo.

Si observamos la conferencia Rio+20, notamos que el poder corporativo global ha realizado un lobby efectivo para defender sus intereses tanto en la ONU como individualmente con gobiernos de muchos países, al presentar la propuesta de la 'economía verde' que incluye la privatización y la mercantilización de la naturaleza como el rumbo adecuado hacia un futuro 'sustentable'. Y aún más, tenemos la impresión de que un conjunto de empresas transnacionales de gran porte tiene el control de hecho en la ONU y en los gobiernos y en otras instituciones que integran los estados nacionales, como el cuerpo policial y el poder judicial, para defender sus intereses actuales y futuros, criminalizando y persiguiendo a comunidades y activistas locales que puedan representar algún obstáculo.

Para ver esa realidad, era suficiente mirar un poco más allá de los lugares de las actividades de Rio+20. Las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Río organizaron, por ejemplo, los llamados Toxic Tours, también denominados como el 'Lado B' de Río de Janeiro. Se organizaron visitas de solidaridad a la población del barrio de Santa Cruz, en el oeste de la ciudad anfitriona, afectada por la mega siderúrgica TKCSA, que pertenece a Vale y a la transnacional alemana Thyssenkrup. También fueron visitadas las comunidades de la ciudad de Magé y de la región de Duque de Caxias, entre otras afectadas por las instalaciones de Petrobras - empresa brasileña de extracción de gas y petróleo.

Después de las visitas, representantes de las tres comunidades se encontraron para intercambiar experiencias sobre los Toxic Tours en un evento durante la Cumbre de los Pueblos. Los habitantes de Santa Cruz reclamaron por la contaminación del agua y del aire, argumentando que 'ya no comemos arroz y porotos, comemos polvo de hierro', y denunciaron los problemas sanitarios de la población y las tácticas de cooptación de la empresa. Los habitantes también manifestaron que la pesca como medio de subsistencia se tornó prácticamente

inviabile y un pescador se desahogó diciendo: 'quieren que nosotros digamos que ya no somos más pescadores', y otro agregó: 'yo era un hombre de mar, ahora ya no sé qué soy'.

Algunos días después de Rio+20 tuvimos noción de la magnitud de la violencia que afecta a los pescadores en el estado de Río de Janeiro, cuando João Luis Telles Penetra y Almir Nogueira de Amorim de la Asociación de los Hombres del Mar de la Bahía de Guanabara (AHOMAR), entidad que defiende la pesca artesanal en la región, fueron brutalmente asesinados. AHOMAR lucha contra los impactos socioambientales de los grandes emprendimientos en la región que afectan a los pescadores; en especial, luchó contra los impactos de una de las inversiones de Petrobras en la región, un complejo petroquímico.

También durante Rio+20, 300 indígenas y otros habitantes de la región que querían apoyarlos realizaron el Encuentro Xingu+23 para protestar contra la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte en el estado de Pará en la Amazonia brasileña, una obra promovida por Eletrobrás - otra empresa brasileña de gran porte en el sector energético - que afectará a miles de personas y destruirá por lo menos 50 mil hectáreas de selva amazónica. Posteriormente la policía de Pará solicitó a la Justicia del estado de Pará la prisión de 11 activistas, entre ellos un sacerdote que rezó una misa y bendijo el encuentro Xingu+23 y un habitante a quien destruyeron su casa por las obras. En la ciudad de Río, los indios realizaron una breve ocupación del principal financiador de la obra, el banco público brasileño BNDES que, con dinero de los brasileños, financia la obra millonaria.

El poder de las corporaciones no solo afecta a las poblaciones que protestan contra sus proyectos; ese poder parece ser capaz de hacer caer presidentes, si observamos con atención lo que ocurrió inmediatamente después de Rio+20 en Paraguay donde el presidente Fernando Lugo, democráticamente elegido, fue destituido de la presidencia. Es innegable la interferencia del poder del agronegocio en este hecho, se trata de un sector que domina la economía paraguaya y también el escenario político, y que cuenta con transnacionales como Monsanto que gana millones de dólares americanos con la promoción del uso de semillas genéticamente modificadas en el país.

Al analizar esta realidad, el mensaje de la Cumbre de los Pueblos es bastante claro: es necesario actuar, y las organizaciones y activistas presentes comenzaron a hacerlo manifestándose contrarios a la deportación arbitraria del compañero Jeremías. Y después de muchas protestas, a nivel nacional e internacional, el gobierno brasileño tuvo que retractarse y permitir la entrada de Jeremías, que volvió a viajar de Mozambique a Brasil y llegó a Río de Janeiro el 19 de junio, seis días después de la deportación.

Cuando Jeremías llegó al aeropuerto de Río de Janeiro, pudo ver nítidamente las dos caras del mundo actual: por un lado, la cara de las corporaciones en los 'bellos' afiches colocados en varios lugares del aeropuerto con la intención de darles la bienvenida a él y a otros participantes de Rio+20, en los que aparecía como patrocinador del evento la empresa Vale, que Jeremías conocía muy bien. Pero también las empresas citadas en este editorial- Petrobras y Electrobras- están entre los auspiciantes oficiales del evento de la ONU.

Para suerte de Jeremías, él también pudo ver la cara del pueblo unido y en lucha con la presencia de decenas de activistas que lo recibieron con fiesta y alegría, celebrando la victoria de haber logrado que se hiciera justicia.

Por último, que nadie se deje engañar por las muchas caras 'verdes' que las empresas nos muestran para ocultar sus violaciones, sus verdaderas prácticas. Que toda la solidaridad prestada a Jeremías sea, como él mismo recordó, transmitida también a todas las comunidades que sufren arbitrariedades y violaciones por parte de las corporaciones. Y ¡que continuemos uniéndonos y fortaleciéndonos en la lucha contra el poder corporativo y a favor de la vida!

[index](#)

MÁS ALLÁ DE RÍO+20

- Continuar con nuestras luchas



Quien estuvo en Río de Janeiro entre el 15 y el 23 de junio pudo observar tres procesos paralelos y diferentes pero conectados entre sí.

El primer proceso, de carácter cerrado, fue el de la conferencia sobre el desarrollo sostenible llamado Río +20, que tuvo lugar en Riocentro, un centro de conferencias distante del centro de la ciudad y muy protegido por miles de policías y militares. Este proceso fue incentivado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y congregó a representantes de 188 países que se concentraron para elaborar, en conjunto, un documento final sobre el futuro de la tierra y de la humanidad. La propuesta incluida en este documento, que estaba debatiéndose mucho antes de la conferencia, generó tanta polémica que el gobierno brasileño la reemplazó, algunos días antes del comienzo de la conferencia oficial, con una nueva redacción. El documento que los países finalmente aprobaron puede ser leído en <http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html>

El documento, llamado "El futuro que queremos", fue clasificado por la presidente de Brasil, Dilma Roussef, como el "consenso posible". Sin embargo, poco se agregó en este 'nuevo' documento a lo que ya fue escrito en declaraciones y acuerdos multilaterales anteriores sobre medio ambiente y temas relacionados. Y lo que es más grave: el documento, aún reconociendo la gravedad de la crisis ambiental y de otras crisis que la humanidad vive actualmente no obliga a los

países a tomar medidas urgentes y estructurales para enfrentarlas.

Por otro lado y específicamente en relación al párrafo sobre el tema bosques, cabe considerar como un resultado positivo que el documento hace pocas referencias explícitas a mecanismos de mercado como REDD+ y a comercialización de servicios ambientales como forma de combatir la deforestación. En cuanto al tema biodiversidad, el texto afirma inclusive que, “reafirmamos el valor intrínseco de la diversidad biológica...”, oponiéndose, de cierta forma, a la propuesta de la “economía verde” que implica la necesidad de poner precio a la biodiversidad y a otros “servicios ambientales”. Ese resultado positivo se debe a la postura de los países del Sur, más precisamente a los países que componen el G-77 y que presentaron un documento en esos términos antes de la Río +20.

Sin embargo, ello no quiere decir que en Río de Janeiro no se discutieron propuestas de mercantilización de la naturaleza a través de la comercialización de ‘servicios ambientales’, introduciendo así un segundo proceso que ocurrió en la ciudad en aquellos días.

Este segundo proceso se concentró en lujosos hoteles y otros confortables espacios fuera de la conferencia de la ONU. Consistía en un conjunto de seminarios, eventos y reuniones en los que países y estados, bancos nacionales y multilaterales inclusive el Banco Mundial, ONG conservacionistas y corporaciones discutieron iniciativas que ellos tildaron de ‘verdes’ y ‘sostenibles’.

Un ejemplo fue el Día de Acre, un estado brasileño en la región de la selva amazónica. Se trató de un evento organizado en el bello Jardín Botánico de Río de Janeiro para celebrar el ‘éxito’ de Acre, con la distribución de cuadernos llamados “Acre+20: una tierra de sueños, un mundo de oportunidades”. O, en las palabras del senador Jorge Viana, hermano del actual gobernador, un “enorme depósito de créditos de carbono”. Con una legislación estadual aprobada, que es una de las más sofisticadas al instalar el “Sistema Estadual de Incentivo a Servicios Ambientales”, el estado está pronto para vender y comercializar esos “servicios” para los que quieran compensar por sus actividades contaminadoras, independientemente del resultado de la conferencia oficial de Río +20, como varios oradores reafirmaron. Por ejemplo, el gobierno de Italia, presente en el evento, mostró públicamente su interés en firmar un acuerdo con el gobierno de Acre.

Sin embargo, durante el evento, algunos activistas de Acre denunciaron la falsa imagen de un estado perfecto de la “economía verde”, y entregaron un dossier llamado “El Acre que los mercaderes de la naturaleza esconden”, con denuncias de destrucción ambiental y de represión social (vea <http://www.cimi.org.br/pub/Rio20/Dossie-ACRE.pdf>). Esa crítica introduce el tercer proceso que tuvo lugar en esos días en Río de Janeiro.

El tercer proceso fue el espacio del pueblo, la llamada Cumbre de los Pueblos, en la región Aterro do Flamengo, próxima al centro de la ciudad. La preparación de este espacio comenzó mucho antes de la Río +20 en una articulación entre las diversas redes nacionales, internacionales y también movimientos sociales. La Cumbre atrajo a cerca de 50 mil personas, muchos de Brasil y de Latinoamérica, pero también contó con representantes de otros continentes. Todas y todos

participaron en los cientos de actividades autogestionadas que fueron organizadas para llamar la atención sobre cuestiones específicas y generales, pero, principalmente, para renovar la esperanza de lucha.

No obstante, dentro de la Cumbre, hubo un proceso crucial y central que se destacó y contó con la participación de muchos: la realización de plenarios de convergencia en torno a cinco grandes temas previamente definidos, que culminaron en tres asambleas sobre las causas estructurales y falsas soluciones para las diversas crisis que afectan a la humanidad, nuestras propuestas para enfrentar esas crisis y nuestra agenda común de luchas. Los participantes de la Cumbre también promovieron una gran manifestación con más de 50 mil personas por las calles del centro de Río de Janeiro, además de otras movilizaciones durante los días del evento, en su mayoría, para protestar contra el poder corporativo y solidarizarse con comunidades locales en Río, afectadas por el proceso brutal de concentración de riqueza y privatización por el cual pasa la ciudad. Ejemplo de ello es la situación de la comunidad de la Vila Autódromo amenazada de expulsión a causa de las obras para las Olimpiadas en 2016 en Río de Janeiro.

La declaración final de este proceso (vea cupuladospovos.org.br) pretende motivarnos para continuar la lucha, de forma más articulada y con una noción y análisis más nítidos de cómo las diferentes cuestiones a las cuales diferentes movimientos y organizaciones se dedican están interligadas. Mientras la apropiación y la privatización de lo que es público, como ocurre en las regiones de bosques con proyectos REDD, con concesiones para madereras, para monocultivos de árboles, etc. genera expulsión y división del pueblo, procesos como este que ocurrió en la Cumbre de los Pueblos generan lazos de solidaridad entre diferentes organizaciones, comunidades, movimientos sociales y activistas de todos los rincones del mundo. Estos eventos deben ser repetidos y fortalecidos, y la agenda común de luchas, puesta en práctica en un apoyo directo a las luchas por la defensa de los derechos de las poblaciones y de la naturaleza, contra la destrucción y la mercantilización; y en la construcción de las soluciones del pueblo, que no sea una 'economía verde', impuesta de arriba hacia abajo, para atender intereses de grandes corporaciones y mantener un sistema de producción y consumo excesivo y desigual, sino, al contrario, una economía de abajo hacia arriba, basada en derechos y valores colectivos.

Los dos primeros procesos descritos, que involucran gobiernos y corporaciones y que tuvieron lugar durante Río +20, mostraron que las corporaciones y sus aliados, como el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo, van cumpliendo sus agendas de mercantilización y financerización de la naturaleza, de economía verde, aún si los gobiernos en el espacio de la ONU no las suscriben en los términos que las corporaciones pretenden. Pero el tercer proceso, que involucra a los pueblos, mostró que somos capaces de, en conjunto, analizar, proponer soluciones y elaborar una agenda común, y así avanzar en la globalización de la lucha por un mundo social y ambientalmente justo.

Reafirmamos, finalmente, la conclusión de la declaración final de la Cumbre de los Pueblos (<http://cupuladospovos.org.br/>): "La transformación social exige convergencias de acciones, articulaciones y agendas comunes a partir de las

resistencias y proposiciones necesarias que estamos disputando en todos los rincones del planeta. La Cumbre de los Pueblos en la Río +20 nos incentiva para continuar nuestras luchas.”

[index](#)

COMUNIDADES Y BOSQUES

- Asesinatos en el mundo entero – el precio del acaparamiento de tierras



(foto: Global Witness)

El acaparamiento de tierras se caracteriza por la adquisición, por parte de compañías, fondos de inversión y mercados financieros en general, de grandes extensiones de tierra en países de África, América Latina y Asia, para diversos usos, como el monocultivo a gran escala, la minería, el turismo, las represas hidroeléctricas y la producción de alimentos para exportación (ver Boletín nº 177 del WRM). Esto tiene numerosas consecuencias para las comunidades y sus bosques, medios de vida y conocimientos tradicionales, para su presente y su futuro.

Uno de los impactos directos de la arremetida corporativa contra la vida y la naturaleza es el número de víctimas mortales entre quienes ofrecen resistencia.

Un nuevo informe de Global Witness revela que en todo el mundo se ha intensificado la violencia contra los activistas que luchan por la tierra, los bosques y la minería.

El valioso informe recientemente publicado – “A Hidden Crisis? Increase in killings as tensions rise over land and forests” – muestra la violencia creciente y las violaciones de los derechos humanos que conlleva la competencia por tierras y bosques.

Lo que sigue es un extracto editado de ese informe. El texto completo figura en http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/A_hidden_crisis-FINAL%20190612%20v2.pdf

Global Witness contabilizó el número de personas a las que mataron en la última década (de 2002 a 2011 inclusive) mientras defendían sus derechos o los de otras personas, en lo referente al medio ambiente y, en particular, a la tierra y los bosques. Entre esos derechos figuran el de gozar de un ambiente sano; los

derechos de los pueblos indígenas a su tierra y a los recursos de ésta, bosques incluidos; el derecho a la vida, a la subsistencia y a la libertad de expresión.

La investigación de Global Witness encontró que durante la década pasada 711 personas fueron muertas en diferentes lugares del mundo, o sea un promedio de más de un asesinato por semana. De ese total, 106 personas murieron en 2011, es decir casi el doble del número de víctimas de 2009. Eso comprende a quienes fueron blanco de ataques específicos o de enfrentamientos violentos durante manifestaciones, y a quienes investigaban o denunciaban operaciones mineras o forestales, actividades agrícolas o ganaderas intensivas, plantaciones de árboles, represas hidroeléctricas, desarrollo urbano y caza furtiva.

Los asesinatos fueron de diversos tipos: hubo muertes en enfrentamientos entre las comunidades y las fuerzas de seguridad estatales, desapariciones seguidas de muerte confirmada, muerte durante el arresto, asesinato de una o varias personas determinadas.

El documento revela una falta alarmante de información sistemática sobre el tema en muchos países, y ninguna vigilancia especializada a nivel internacional. Así, las cifras mencionadas están probablemente lejos de reflejar el número de muertos y el alcance real del problema. La investigación también revela que los países con mayor número de muertes denunciadas son Brasil, Perú, Colombia y Filipinas. En éstos y otros países (como Camboya, la República Democrática del Congo e Indonesia) existe una preocupación constante sobre la implicación del sector privado nacional y extranjero en estas muertes.

La investigación no encontró un alto índice de muertes en África. Se interpreta que podría deberse al escaso conocimiento de los derechos y a la falta de información en las zonas rurales del continente. También es probable que se deba a otros factores, como el hecho de que los Estados suelen ser propietarios de las tierras y los bosques. Por ejemplo, en África los bosques administrados por gobiernos representan el 98% del total, mientras que en Asia y América Latina el porcentaje es de 66% y 33% respectivamente. El informe de Global Witness encontró que la predominancia de la propiedad estatal de tierras y bosques puede haber contribuido a debilitar a las poblaciones rurales pobres, incapacitándolas para embarcarse en pleitos.

Otra tendencia que se señala es que la cultura de la impunidad, particularmente fuerte en muchos países, contribuye a debilitar las convicciones.

Estas tendencias son síntomas de la competencia cada vez más encamizada por los recursos, y de la brutalidad y la injusticia que conlleva.

La presión sobre tierras y bosques ya ha cobrado un alto precio: sólo el 20% de los bosques originales del mundo se conserva intacto, y en los últimos 20 años se ha degradado el 25% de los suelos. Sin embargo, se prevé que la demanda mundial de tierras y bosques (para alimentos, fibras y otros recursos) seguirá en aumento, empujando las fronteras de la inversión hacia zonas donde la gestión, los derechos de posesión y el respeto de las leyes son inadecuados. Al intensificarse la competencia, la población rural y los activistas locales quedan en la línea de fuego.

A nivel mundial, es bien sabido que el principal factor del aumento de la demanda de tierras es la agroindustria, y ese aumento es exponencial. El Banco Mundial informó que las inversiones en tierras agrícolas se cuadruplicaron entre 2001 y 2009. África recibió la mayor parte de dichas inversiones (el 62% de los proyectos, que cubren un total de 56,2 millones de hectáreas), seguida por Asia (17,1 millones de hectáreas) y luego Latinoamérica (7 millones de hectáreas).

De Camboya a Perú, las comunidades rurales se enfrentan a más intimidaciones extremas, violencia, expulsiones forzosas y asesinatos. Entre las autoridades gubernamentales, las élites y el sector privado se hacen acuerdos secretos, sin que las comunidades locales que viven de la tierra o del bosque, y que en realidad suelen pertenecerles, puedan hacer valer sus derechos o su opinión al respecto. Es frecuente que dichas comunidades ganen poco o nada de la inversión.

Brasil, Camboya, Colombia, Indonesia, Perú y Filipinas son los países en los que son más frecuentes los crímenes cometidos por hombres uniformados que actúan por cuenta de intereses privados o gobiernos. En Filipinas, donde la “desaparición involuntaria” es considerada delito desde hace muy poco tiempo, ocurrieron 50 asesinatos en la última década, pero ninguno dio lugar a acciones judiciales.

El profesor Bill Kovarik, de la Universidad de Radford, Estados Unidos, realizó investigaciones sobre asesinatos en Asia y América Latina. Según él, “Es indiscutible que el número de muertes asociadas a la defensa del ambiente que han sido denunciadas por los medios asiáticos y latinoamericanos ha aumentado considerablemente desde el punto de vista estadístico. Es difícil saber si el número de muertes aumentó, o si se ha vuelto más difícil que pasen desapercibidas. Sólo se sabrá investigando más pero, de todos modos, estamos obligados a considerar esas violaciones de los derechos humanos como parte de una nueva tendencia que ya resulta visible”.

El documento presenta informes más detallados sobre los asesinatos de Chut Wutty (Camboya), Frédéric Moloma Tuka (República Democrática del Congo), Nisio Gomes (Brasil) y Eliezer “Boy” Billanes (Filipinas). Un artículo de *The Guardian* (<http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jun/19/environment-activist-deaths>) cuenta la historia de José Cláudio Ribeiro da Silva y Maria do Espirito Santo, asesinados por luchar contra las actividades madereras y agroindustriales en Brasil.

Todos ellos han dejado de ser meras cifras, para convertirse en los rostros de los numerosos líderes y lideresas comunitarias, indígenas y activistas que serán recordados y recordadas no sólo por su muerte sino, sobre todo, por su vida.

[index](#)

- Camboya: primer seguro de riesgo político para un proyecto REDD



El objetivo de la firma privada de inversión Terra Global Capital es “facilitar el mercado de créditos de carbono resultantes del uso de la tierra y otros créditos ambientales... aportando pericia técnica para medir y monetizar los créditos de carbono y el financiamiento del carbono a través de un fondo de inversión específico...”.

Terra Global se ha asociado con la Administración Forestal Camboyana y con la ONG internacional Pact Cambodia para realizar el primer proyecto REDD del país, en la profundidad de los bosques de la provincia de Oddar Meanchey, en el noroeste de Camboya. Oddar Meanchey tiene una de las tasas de deforestación más altas del país, provocada por proyectos mineros, plantaciones agroindustriales, asentamientos militares en respuesta a conflictos sobre fronteras, tala ilegal y otros conflictos que aquejan a las comunidades locales.

El proyecto apunta a obtener ingresos por la venta internacional de créditos de carbono forestal, supuestamente generados por la garantía que da la firma inversora de que el carbono, que corría el riesgo de ser liberado por medio de la deforestación, permanecerá almacenado (“emisiones de carbono evitadas”) en los árboles de las 64.318 hectáreas de bosques durante los 30 años de duración del proyecto.

Según afirma la compañía, dichos ingresos serán usados para “financiar actividades que disminuyen la deforestación, como patrullas forestales comunitarias, control de incendios, proyectos comunitarios de desarrollo de recursos hídricos, fortalecimiento y clarificación de la tenencia de tierras, sistemas agrícolas sostenibles, intensificación de la agricultura y cocinas de bajo consumo”.

En noviembre de 2011, una agencia del gobierno de Estados Unidos, la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), que financia y asegura a inversores estadounidenses que participan de proyectos en países del Sur, otorgó a Terra Global Capital un seguro contra riesgos políticos por US\$900.000.

OPIC siempre se dedicó principalmente a financiar y asegurar directamente a inversores privados con proyectos en países del Sur pero, desde 1987, dicha agencia colabora cada vez más con fondos de inversión en acciones, muchos de los cuales sirven de intermediarios financieros que, a su vez, financian proyectos en el Sur. OPIC ya ha dedicado al menos 3.600 millones de dólares a más de 50 fondos de inversión privados. Quienes critican los proyectos REDD dicen, entre otras cosas, que dichos fondos suelen exigir una ganancia demasiado alta para convenir a proyectos de desarrollo, y que buscan realizar beneficios en pocos

años, en detrimento de un desarrollo sostenible a largo plazo.

OPIC está transfiriendo su cartera energética de los grandes proyectos de combustibles fósiles hacia los proyectos de supuesta energía renovable, a los cuales agrega ahora lo que la agencia denomina “recursos renovables”, entre los cuales figuran los proyectos REDD y proyectos agrícolas. Las asignaciones de fondos de OPIC a los “recursos renovables” pasaron de 10 millones en 2008 a 1.100 millones en 2011.

El Gobierno de EE.UU. cuenta ahora con los proyectos de “recursos renovables” financiados y asegurados por OPIC para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de “financiación del clima”, referentes al compromiso de los países del Norte de proveer fondos para ayudar a los países del Sur a enfrentar el cambio climático. Sin embargo, la financiación y los seguros de OPIC están dirigidos principalmente a clientes del sector privado, entre los cuales figuran inversores estadounidenses. Así, en materia de clima y desarrollo Estados Unidos elige una senda cada vez más definida por intereses privados y para provecho de éstos.

OPIC está usando el seguro contra riesgos políticos, es decir contra acciones políticas ilegales, para proteger a quienes invierten en REDD, en el caso de que el país (Camboya en este caso) adoptara en el futuro reglamentaciones de alcance nacional o regional que rijan las actividades REDD. Dichas reglamentaciones podrían incluir la definición de objetivos nacionales o provinciales de reducción de emisiones, sistemas de contabilización y supervisión, e incluso formas de determinar la propiedad de los créditos y la distribución de los beneficios. Estos requisitos podrían cambiar la forma de llevar a cabo un proyecto REDD y tener grandes consecuencias financieras para quienes hacen inversiones de futuro en estas negociaciones, aceptando que su inversión esté regida por una serie de condiciones que pueden llegar a ser diferentes.

El respaldo de OPIC al proyecto REDD de Oddar Meanchey en Camboya sienta un precedente mundial, pues se trata de la primera póliza de seguro contra riesgos políticos para un proyecto de este tipo.

OPIC y los promotores del proyecto REDD de Oddar Meanchey afirman que éste será muy beneficioso para el clima, el desarrollo y el medio ambiente locales. Sin embargo, la viabilidad de los proyectos REDD depende en gran medida del mercado de carbono, que no es confiable. El seguro contra riesgos políticos de OPIC protege a los inversores del proyecto, y no necesariamente a las comunidades locales, en caso de que los riesgos cubiertos se manifiesten. De hecho, parecería que las comunidades que residen en torno a los bosques figuran últimas en la lista de beneficiarios del proyecto, en la toma de decisiones y en la protección contra riesgos políticos y comerciales.

Contra toda lógica, el respaldo que da OPIC a proyectos REDD y otros sobre recursos renovables cuenta como parte de los compromisos financieros contraídos por el gobierno de EE.UU. con los países en desarrollo, a pesar de que quienes los reciben son entidades privadas y no los gobiernos de esos países, y de que puede impedir al gobierno camboyano defender sus intereses en el caso de que el

proyecto no produzca los beneficios prometidos.

Artículo basado en pasajes editados de: “Precedent-Setting Insurance for REDD Project in Cambodia Raises Concerns”, documento redactado por Pacific Environment, FERN y Focus on the Global South; enviado por Shalmali Guttal, Focus on the Global South, s.guttal@focusweb.org

[index](#)

- El Salvador: repudio a la preparación para REDD+



(Foto: http://climatevoices.files.wordpress.com/2011/11/no-redd_poster-cartel.jpeg)

El mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques) y posteriormente en su versión ampliada de REDD+, que abarca los monocultivos de árboles, forma parte de las opciones “de mercado” para hacer frente al cambio climático que consideramos falsas, porque no abordan las verdaderas causas del problema. El concepto básico de REDD es que los gobiernos, o propietarios o concesionarios (empresas, grandes ONGs) de los bosques en el Sur deberían ser recompensados por mantenerlos en pie en lugar de cortarlos. La propuesta, además de convertir el carbono en una mercancía, tiene una serie de connotaciones con respecto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre los bosques y su acceso a los mismos.

Aún así, siguen adelante los proyectos REDD+, con mucho dinero de por medio. Parte del proceso lo constituye la Disposición para la preparación de una propuesta – REDD+ – (Readiness Preparation Proposal) (R-PP), un documento en el que un país desarrolla el marco de trabajo (tipos de estudio y preparación, su implementación, términos de referencia o trabajo) que le permitirá “estar preparado” para participar en los sistemas de incentivos financieros para REDD+. Los lineamientos para los documentos R-PP fueron creados por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), una alianza que promueve los proyectos REDD+ y es implementada por el Banco Mundial. Una vez más, el Banco Mundial es actor activo del creciente proceso de financierización de la naturaleza, en este caso del clima, habilitando la movilización de cuantiosos fondos y posibilitando inversiones financieras y transacciones bursátiles.

En el caso de El Salvador, el gobierno presentó un documento R-PP al FCPF, el cual generó una fuerte reacción de organizaciones sociales y de académicos de El Salvador, que presentaron públicamente los argumentos para su rechazo al R-PP.

En el informe “Los esquemas de REDD-plus en El Salvador: Perfil bajo, disfraces benevolentes y mercantilización de ecosistemas y territorios”, (1) los académicos Yvette Aguilar, Maritza Erazo y Francisco Soto – que han venido dando seguimiento a la participación del gobierno de El Salvador en el mecanismo REDD+ – explican que dicho mecanismo habilitará “la compra-venta de bonos de carbono directamente en los mercados de carbono o a través de fondos de intermediación, como el Fondo de Carbono Forestal, para la compensación de las emisiones de los países desarrollados. Dicho enfoque busca la mercantilización de la naturaleza mediante la comercialización del carbono almacenado en los ecosistemas y territorios de los cuales dependen las comunidades indígenas, rurales y campesinas para su sobrevivencia”.

El referido documento señala que la propuesta posee graves errores conceptuales y carencias técnico-científicas que son insuperables aún bajo los laxos criterios del FCPF y que harían que la propuesta REDD-plus coloque al país en situación de mayor vulnerabilidad ante el cambio climático.

Por su parte, el pasado 15 de mayo, varias organizaciones sociales presentaron una carta al Coordinador del FCPF (2) en la que expresaban su preocupación y rechazo al referido documento, pidiendo que no fuera aprobado y denunciando que “no existe ni una Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, ni un proceso oficial abierto, transparente y participativo”. Y argumentaban que el R-PP presenta graves deficiencias conceptuales y metodológicas, y de ser aprobado por el FCPF tendría graves implicaciones negativas para la sociedad salvadoreña, aumentando su vulnerabilidad y la frecuencia de los desastres, y retrasaría el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales urgentes en materia de cambio climático”.

Las organizaciones exigieron asimismo “que cualquier proceso de consulta que surja en nuestro país en tomo a REDD, sea organizado e impulsado de manera transparente, informada, verdaderamente participativa, sustentado a la luz del mejor conocimiento disponible y de los compromisos internacionales adquiridos”. Esto a raíz de que el proceso para la concepción y elaboración del R-PP se llevó a cabo de manera cerrada, inconsulta y poco transparente por las autoridades, que no consultaron a “los actores y sectores relevantes, algunos de los cuales ya han realizado propuestas en materia de políticas y medidas ante el cambio climático”.

En decidido rechazo al documento R-PP y al proceso en el cual fue concebido, las organizaciones sociales salvadoreñas expresaron que el R-PP “no tiene la sustentación científico-técnica, ni la legitimidad social para garantizar la viabilidad política requerida para su apropiación e implementación exitosa por los actores relevantes; particularmente las poblaciones más vulnerables al cambio climático y a la variabilidad asociada, dentro de las cuales las comunidades indígenas, campesinas y dependientes de los sistemas forestales, las mujeres en desventaja económica y las poblaciones rurales y urbanas marginadas, juegan un papel preponderante”.

Además, las veintitrés organizaciones y comunidades indígenas que integran el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), también enviaron una carta (3) apoyando la de las organizaciones sociales y reafirmando su rechazo al contenido de dicha propuesta. En la carta expresaron que el diseño del R-PP “no considera ni incorpora las preocupaciones ni necesidades de los pueblos indígenas de El Salvador en materia de impactos y adaptación al cambio climático, y el proceso para su elaboración adoleció de una consulta previa, libre e informada con dichos pueblos conforme al derecho indígena internacional. A pesar que el R-PP presentado por el MARN incorpora una sección relativa a los pueblos indígenas de El Salvador, su contenido desconoce los avances del derecho indígena internacional y los compromisos que de éste se derivan para los gobiernos”.

El CCNIS alertó que “los impactos negativos del cambio climático en El Salvador están aumentando y ocasionando daños y pérdidas en nuestras comunidades indígenas, cuyas viviendas, cultivos y medios de subsistencia se han visto menguados, deteriorados o destruidos, y ya se observan los efectos negativos en su salud, seguridad alimentaria e ingresos. El cambio climático está restringiendo aún más sus derechos en cuanto al acceso, uso y usufructo de la tierra en los territorios donde habitan y desarrollan sus actividades de subsistencia, espirituales y culturales. La propuesta del R-PP de ninguna manera considera estos impactos negativos ni tampoco considera las propuestas que como pueblos indígenas podemos aportar al país para la elaboración e implementación de una Estrategia y Plan Nacional ante el Cambio Climático y un Plan de Adaptación Nacional”.

También denunció que “muchas de las políticas y medidas adoptadas para la mitigación de las causas del cambio climático, constituyen amenazas para los pueblos indígenas y podrían generar mayor vulnerabilidad y desadaptación. Al igual que los biocombustibles, los esquemas de REDD-plus han sido seriamente cuestionados por nuestros pueblos indígenas, por los serios impactos negativos que podrían ocasionar, particularmente aumentando las restricciones en el acceso a la tierra y sus recursos, y propiciando el despojo a gran escala de nuestros territorios indígenas. A fin de prevenir dichos impactos, los pueblos indígenas hemos luchado por la incorporación de salvaguardas específicas en las políticas, programas, normas y acuerdos que nos atañen, para asegurar el respeto de nuestros derechos específicos”.

El gobierno de El Salvador no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, por el momento el único instrumento regulador internacional que otorga a los pueblos indígenas el derecho internacionalmente validado a un territorio propio, a su cultura e idioma. Aún así, podría recibir fondos para implementar un proyecto REDD, que involucra tan directamente a las comunidades de los bosques, con lo cual quedaría de manifiesto la falta de garantías al respeto de sus derechos en estas transacciones.

Por más detalles ver <http://wrm.org.uy/countries/ElSalvador.html#info>

Artículo basado en:

(1) “Los esquemas de REDD-plus en El Salvador: Perfil bajo, disfraces benevolentes y mercantilización de ecosistemas y territorios”, Yvette Aguilar, correo electrónico: yvette.a@gmail.com, Maritza Erazo, correo electrónico: mlerazo@yahoo.com , Francisco Soto, correo electrónico: francisco.soto.monterrosa@gmail.com, San Salvador, El Salvador, 17 de julio de 2012, enviado por Francisco Soto; http://wrm.org.uy/paises/ElSalvador/esquemas_REDD_plus_en_El_Salvador.pdf

(2) carta de organizaciones sociales enviada al FCPF del BM, disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/ElSalvador/Carta_FCPF-RPP-SLV-15May2012.pdf ;

(3) carta del Consejo Coordinador Nacional de Indígenas Savadoreños (CCNIS) al FCPF del BM, disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/ElSalvador/Carta_FCPF-RPP-SLV_CCNIS-24May2012.pdf

[index](#)

- Malasia: la represa de Baram inundaría aldeas indígenas para provecho de la minería en Borneo



El actual gobierno de Sarawak está planeando construir doce represas hidroeléctricas, que desplazarán a decenas de miles de personas e inundarán grandes extensiones de bosque tropical. Si bien son presentadas como fuentes de energía limpia, en los países tropicales las represas hidroeléctricas tienen un impacto devastador sobre nuestro clima, debido a los gases de efecto invernadero provenientes de la descomposición de la masa de vegetación que queda sumergida cuando se inunda una gran extensión de bosque.

Las autoridades afirman que la energía generada por las represas será utilizada por los lugareños, pero eso es una mentira descarada. Por sí sola, la única represa ya construida produce el doble de la energía que consume todo el Estado en las horas pico. En realidad, la energía beneficiará sobre todo a las industrias contaminantes, como la fundición de aluminio perteneciente al gigante australiano Rio Tinto; el medio ambiente se degradará aún más, y el dinero saldrá del país.

La represa de Baram es una de las 12 que las autoridades de Sarawak planean construir luego de terminada la represa de Bakun. Se trata de una represa de 162 metros de altura, que inundará una zona de bosque tropical de 412 km² (41.200 hectáreas) y al menos 26 aldeas indígenas, provocando el desplazamiento forzoso de cerca de 20.000 nativos de la región.

La represa proyectada haría estragos en la cultura de los Kenyah, los Kayan y los Penan del curso superior del Baram, uno de los grandes ríos del bosque tropical de Borneo. Muchas de las aldeas quedarían sumergidas y simplemente dejarían de existir. También las comunidades tradicionales que se encuentran río abajo se enfrentarían a cambios radicales y a la contaminación del ecosistema fluvial, que afectaría el transporte sobre el río, la pesca, la irrigación y el acceso al agua potable.

La represa de Baram y las otras represas proyectadas no cumplen al menos 6 de las 7 condiciones fijadas por la Comisión Mundial sobre Represas (WCD):
Conseguir la aceptación pública, Evaluación exhaustiva de opciones, Consideración de las represas existentes, Conservar los ríos y los medios de subsistencia, Reconocer derechos y compartir beneficios, Asegurar el cumplimiento, Compartir los ríos para la paz, el desarrollo y la seguridad.

La represa de Murum ya está en obra y, probablemente, la de Baram y las demás serán construidas a continuación. Los habitantes autóctonos están siendo desplazados, en nombre del “desarrollo” y de los “servicios públicos gratuitos”. El gobierno no ha cumplido lo que prometió a numerosos habitantes desplazados de Batang Ai y de Bakun, que se ven privados de sus derechos fundamentales.

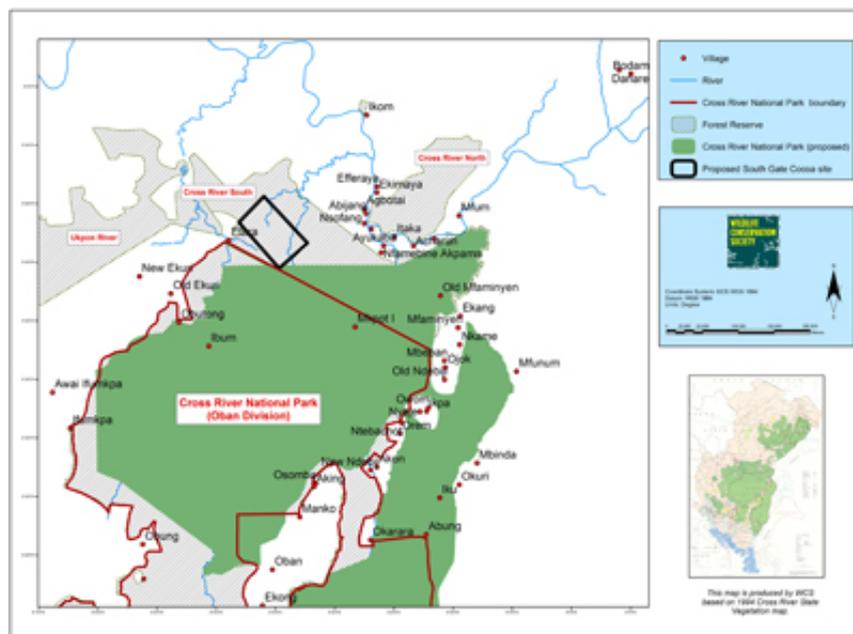
Se ha iniciado una campaña internacional para ejercer presión contra las represas de Sarawak, por medio de una petición en la que se solicita a las autoridades de Malasia que detengan inmediatamente el proyecto, dado que tendría dramáticas consecuencias sociales y ambientales.

Para firmar la petición, hacerlo
en: http://www.avaaz.org/en/petition/STOP_BARAM_DAM_SAVE_SARAWAK_FOREST_AND_RIVER/?foSoedb&pv=7

Artículo basado en información enviada por Cecelia Agnes Ling, correo electrónico: cecelia_ai@yahoo.com

[index](#)

- Nigeria: un proyecto de plantación de cacao amenaza los bosques intactos de los Etara y los Ekuri-eyeyeng



El bosque tropical húmedo del Estado de Cross River es el más grande del país. Aproximadamente 8.500 kilómetros cuadrados corresponden a bosques vírgenes o casi intactos, una parte de los cuales pertenece a la comunidad. Otros 5.140 kilómetros cuadrados de bosque tropical de montaña están catalogados como áreas protegidas: el Parque Nacional de Cross River, que ocupa 3.330 kilómetros cuadrados de bosque de montaña, y las Reservas de Bosque que ocupan 1.810 kilómetros cuadrados; allí es donde los Etara y los Ekuri-eyeyeng tienen sus tierras tradicionales.

Las tierras de los Etara y los Ekuri eyeyeng están administradas por el gobierno del Estado nigeriano de Cross River, en representación de las comunidades indígenas para las cuales el bosque es el principal medio de subsistencia. Es en el bosque donde encuentran tierras agrícolas fértiles y productos madereros para la construcción local, y donde recolectan productos no leñosos utilizados en la alimentación, en artesanías, en medicina y como fuente de ingresos. El bosque también protege ríos y arroyos durante los períodos de sequía, provee agua limpia, y es considerado por la comunidad como un sitio sagrado donde están sepultados sus ancestros.

Ahora, la integridad del bosque y, por consiguiente, la subsistencia de las comunidades, están en peligro. La compañía Southgate Cocoa Produce Limited está planeando adquirir una parcela de 72,41 kilómetros cuadrados de bosque intacto, enteramente situada dentro de la zona de amortiguación contigua al Parque Nacional de Cross River, en tierras de los Etara y los Ekuri-eyeyeng, para realizar allí plantaciones industriales de cacao.

La organización nigeriana Rainforest Resource & Development Centre (RRDC) ha denunciado dicho proyecto, por ser "contrario a los intereses de las comunidades indígenas". El uso de la reserva forestal para la plantación de cacao sería ilegal y, además, no se ha realizado ninguna Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La RRDC previene que "la Reserva Sur de Cross River es un ecosistema de bosque tropical intacto; por consiguiente, ese proyecto representa una grave amenaza para la integridad ecológica del ecosistema y para la vecina División Oban del Parque

Nacional de Cross River”.

La RRDC también señala que Southgate tiene contactos con grandes grupos de interés internacionales. Uno de ellos es Armajaro Trading Limited, filial del grupo Armajaro Holding basado en Londres. Se ocupa del suministro y la distribución de cacao, y sus clientes son fabricantes de chocolate de Asia, Sudamérica, Norteamérica y otros lugares del mundo.

La RRDC ha lanzado una campaña para hacer saber a Armajaro y a todos sus socios y partes interesadas en el extranjero que, contrariamente a lo que Southgate y sus agentes están divulgando, la tierra en cuestión se encuentra íntegramente dentro de la zona de amortiguación de la División Oban del Parque Nacional de Cross River, y que se trata de un bosque tropical intacto y no de la “reserva degradada” de la que hablan.

El llamado puede ser enviado al Gobernador del Estado nigeriano de Cross River, Liyel Imoke, a las direcciones limoke@crossriverstate.gov.ng, imokeliyel@yahoo.com, l.imoke@yahoo.com, y a las diversas sedes de Armajaro del mundo, así como a Richard.Ryan@Armajaro.com y a Vince.McAleer@Armajaro.com

Artículo basado en información enviada por Odey Oyama, Rainforest Resource & Development Centre (RRDC), correo electrónico: rainforestcentre@yahoo.co.uk, odeyoyama@hotmail.com

[index](#)

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Filipinas: la compañía A. Brown se apodera de las tierras del pueblo indígena Higaonon para plantar palma aceitera



La compañía filipina A. Brown Inc. está en el negocio de la plantación y el procesamiento de la palma aceitera. En 2010, comenzó a plantar palma aceitera en 520 hectáreas de tierras públicas reclamadas por el pueblo indígena Higaonon.

Los Higaonon de las aldeas de Bagooboc y Tingalan, de la municipalidad de Opol, provincia de Misamis Oriental, Filipinas del Sur, afirman que han ocupado esas tierras desde antes de la colonización hispánica. Allí, sus ancestros cazaban animales, recolectaban miel y reservaban pequeñas porciones de tierra para la

agricultura, manteniendo su cultura única. Si bien fueron desplazados en los años 1950 para hacer lugar a la explotación maderera y al pastoreo practicados por terratenientes, siguieron volviendo a sus tierras y las hicieron producir.

La empresa A. Brown ingresó a la tierra de los Higaonon para realizar plantaciones de palma aceitera sin obtener previamente su consentimiento libre e informado. Esta apropiación de tierras implicó varias violaciones de derechos humanos: agricultores baleados o ilegalmente arrestados, incendio de casas, destrucción de cultivos, acoso y amenazas de muerte.

Todo esto fue revelado por una Misión Internacional de Inspección (MII) que comenzó el 6 de mayo pasado, dirigida por la Red de Acción contra los Pesticidas en Asia y el Pacífico (PAN AP), el Movimiento Campesino de Filipinas (KMP), la Coalición Campesina Asiática (APC), Sentro Kitanglad, la Organización Lumad de Kalumbay y otras organizaciones de Opol.

La MII descubrió que A. Brown todavía no tiene permiso para operar en la zona mencionada. Autoridades del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) dijeron que esa agencia gubernamental no había otorgado a la compañía ningún permiso para operar en dichas tierras y que se trata por lo tanto de una violación de las leyes forestales y ambientales vigentes.

Las conclusiones de la misión fueron presentadas durante un foro público que tuvo lugar en la Universidad de Filipinas-Diliman, donde se reclamó reiteradamente que la compañía A. Brown fuera expulsada de Opol y que los pueblos indígenas regresaran inmediatamente a su tierra ancestral. También se llamó a investigar las violaciones de los derechos de los Higaonons (ver el informe en <http://www.panap.net/en/fs/post/food-sovereignty-resistance-land-grabbing/1069>).

El establecimiento de plantaciones de palma aceitera a gran escala también atenta contra la soberanía alimentaria de los Higaonon. “Si nos quitan nuestras tierras, condenan a nuestras familias a morir de hambre y violan nuestros derechos, lo único que nos queda es pelear. Como pueblos indígenas, tenemos derecho a la tierra, pero éste nos ha sido continuamente negado”, dijo Rubenson, cuya familia reside en Tingalan desde la época anterior a la colonización hispánica.

Los agroquímicos, como el carbofurán y el glifosato, que aplica la compañía en las plantaciones industriales de palma aceitera, han comenzado a afectar la salud de los Higaonons. Los habitantes de Opol han informado sobre el aumento de la incidencia de toses y resfríos, enfermedades de la piel, diarrea y otras afecciones, desde que se empezó a pulverizar plaguicidas sobre las plantaciones. También los cocoteros y bananeros, su única fuente de ingresos, están muriendo poco a poco desde que comenzó la plantación.

Erwin Navarro, de PAN AP, advirtió sobre los impactos sociales, culturales, sanitarios y ambientales de las grandes plantaciones de palma aceitera que se han extendido a otros países asiáticos, arrasando los bosques con bulldozers y desplazando a numerosos pueblos indígenas.

Se está realizando una campaña para firmar una petición en la que se solicita al

gobierno filipino que expulse inmediatamente de Opol a la compañía A. Brown, que ponga fin a las violaciones de derechos humanos, que castigue a los culpables e indemnice a las víctimas, que cese la profanación de los lugares sagrados y que la compañía, así como todas las unidades y agencias pertinentes del gobierno filipino, limpien y restauren las zonas contaminadas, otorguen de inmediato asistencia económica a los agricultores y pongan en marcha el proceso de obtención del consentimiento previo, libre e informado.

Los invitamos a que ayuden a los agricultores y pueblos indígenas de Opol a recuperar sus tierras, firmando la carta de petición que encontrarán en <http://www.panap.net/en/fs/page/food-sovereignty/1130>.

En todas partes del mundo, la expansión del aceite de palma ha sido posible a través de la apropiación de tierras, el cambio de afectación de los suelos y la deforestación acelerada. Los agricultores y pueblos indígenas desplazados se han visto obligados a convertirse en trabajadores agrícolas en las plantaciones de palma. De manera general, el auge del aceite de palma ha provocado un aumento del hambre y la pobreza, y sólo ha beneficiado a unos pocos intereses privados.

Artículo basado en información extraída de: “Palm oil plantation in Misamis Oriental has no right to occupy indigenous lands, IFFM says”, Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PAN AP), <http://www.panap.net/en/fs/post/food-sovereignty-resistance-land-grabbing/1070>

[index](#)

- Gabón: resistencia al acaparamiento de tierras de Olam para plantar palma aceitera



Tradicionalmente, la palma aceitera siempre formó parte de la cultura de las comunidades de África occidental y central, que la plantaron en sus tierras y recogieron sus frutos, hojas y savia. Procesaban los frutos para obtener aceite de palma para su uso doméstico, o para venderlo en los mercados locales para la producción de vino de palma (ver el documento de información del WRM: “Oil palm in Africa: past, present and future scenarios”, http://wrm.org.uy/countries/Africa/Oil_Palm_in_Africa.html).

Pero la demanda internacional de aceite de palma – y, más recientemente, de agrocombustibles – ha traído a África capitales ávidos de tierras donde realizar plantaciones de palma en vastas extensiones. Y los gobiernos están abriendo las puertas a dichas corporaciones, lo cual hace que las comunidades pierdan sus

derechos territoriales.

En Gabón, la organización Brainforest alertó que las nuevas autoridades gabonesas estaban dando grandes áreas en concesión a la compañía singapurense Olam. La tierra ancestral se está vendiendo a bajo precio, violando los derechos de los pueblos, para realizar grandes monocultivos de palma aceitera, siendo éste uno de los negocios de dicha corporación mundial, que comercializa 20 productos agrícolas e ingredientes alimentarios como proveedora de la cadena de producción agro-industrial.

Brainforest ha lanzado una campaña de firmas para detener las plantaciones industriales de palma aceitera de Olam, en el sitio http://www.brainforestgabon.org/news_fiche.php?id=16#.UAbg4aDs3KT.

Otra organización gabonesa, Attac Gabón, publicó el pasado 5 de junio un comunicado de prensa (1) donde denuncia que el fracaso de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático y la mercantilización de la crisis climática por medio de falsas soluciones – como el concepto de “economía verde” – terminará arruinando la estructura sociocultural de las comunidades y socavando la soberanía de los países.

Según el comunicado, “en Gabón, el fenómeno toma proporciones vertiginosas cuando se considera que ya se están vendiendo más de 300.000 hectáreas a transnacionales. Es necesaria una movilización general para hacer valer el derecho de las comunidades a disponer de su tierra”.

FERN (2) ha informado que el 8 de junio, unos 40 activistas de la sociedad civil, entre los cuales estaba Marc Ona Essangui, director de Brainforest y ganador del Premio Goldman (una especie de “Premio Nobel Verde”), fueron arrestados en Gabón por haber organizado el “contra-Foro”. El evento – prohibido por las autoridades gabonesas – apuntaba a mostrar, durante el New York Forum Africa que allí se realizaba, la corrupción y la falta de democracia y de responsabilidad reinantes en ese país de África central, rico en petróleo. Los problemas que se plantean son las cuestiones de tenencia de la tierra, la expulsión de comunidades locales de la provincia de Woleu Ntem, y la apropiación de tierras por parte de las compañías palmícolas.

Debido a la presión internacional, el gobierno propuso liberar a Ona el mismo día, pero éste se negó a salir a menos que lo hicieran todos los que habían sido arrestados. Finalmente, todos los detenidos fueron liberados.

(1) Notre terre, leur Business !, Attac Gabon, comunicado de prensa del 5 de junio de 2012, <http://www.facebook.com/notes/attac-gabon/notre-terre-leur-business-communiqu%C3%A9-de-presse-dattac-gabon/10150840486325069>

(2) EU Forest Watch Número 172, junio de 2012, FERN, <http://www.fern.org/sites/fern.org/files/FW%20172%20june%202012%20for%20website.pdf>

- Chile: campaña contra la expansión forestal



En Chile, la arremetida de grandes grupos económicos forestales respaldados por el Estado se traduce en más de 3 millones de hectáreas cubiertas de monocultivos industriales de pino y eucalipto.

Las plantaciones forestales han reportado ganancias multimillonarias a grupos como Matte, dueño de Forestal Mininco CMPC, o Angelini, dueño de Forestal Arauco. Pero eso ha sido a costa de haber usurpado tierras Mapuche y haber causado estragos con las referidas especies exóticas, que han mermado el agua de esteros y napas subterráneas aumentando la incidencia de sequía, y han erosionado tierras y reemplazado tierras agrícolas y bosques nativos. El resultado es que, ante la falta de tierras cultivables y la pérdida de agua, gran parte de la población rural emigra a las ciudades, colapsadas por la falta de empleo y de verdaderas oportunidades.

Los lugares donde hay mayor cantidad de plantaciones forestales son territorios que concentran los mayores índices de empobrecimiento y emigración de la población. En especial el centro sur de Chile ha sido el escenario de la expansión forestal, principalmente el territorio ancestral del Pueblo Mapuche, el cual, defendiendo sus derechos sobre la tierra, ha resistido el avance de las plantaciones forestales, con una secuela de represión, cárcel y muerte. Y existe ahora una nueva ofensiva de los forestales, que buscan duplicar a corto plazo la superficie plantada con monocultivos de árboles, para lo cual buscan anexar las tierras de “pequeños propietarios”, es decir tierras de campesinos chilenos y de comunidades Mapuche.

Todo esto ha sido denunciado por organizaciones de todo Chile que, a través de una carta pública (1), hicieron un llamado a sectores campesinos y comunidades Mapuche a estar alertas ante los intentos de las empresas forestales y agentes de gobierno y no permitir la introducción de más plantaciones de pinos y eucaliptos en sus territorios.

El colectivo informativo Mapuexpress y Adkimvn Comunicaciones se suman al llamado organizando una campaña informativa en la que han producido unos spots audiovisuales y de audio (2) para contribuir a la generación de información y conciencia para la defensa de los espacios de vida y subsistencia, exhortando a la difusión y réplica de estos materiales.

Asimismo, Mapuexpress advierte que “en estos tiempos, llegarán a casas de familias rurales las empresas y agentes de gobierno ofreciendo supuestos

beneficios y plantaciones de pino y eucaliptos ¡GRATIS! E incluso ofreciendo bonificaciones con dinero. Es necesario que nos pongamos en alerta y defendamos los territorios, las prácticas ancestrales... la Tierra". Como afirma el colectivo Mapuexpress: "Permitir la introducción de pinos y eucaliptos es pan para hoy y hambre para mañana. Además, es permitir que junto con las plantaciones vengan las plantas de celulosas, una de las industrias más contaminantes del planeta".

Por eso, como dicen las organizaciones en la carta pública, "no permitir la introducción de pinos y eucaliptos es defender la vida, es defender tierras cultivables, es soberanía alimentaria, es aceptar la diversidad y las igualdades, es decir cultura, es decir dignidad para los habitantes..."

(1)Organizaciones de todo Chile hacen un llamado a Sectores Campesinos y Comunidades Mapuche a No introducir más Pinos y Eucaliptus en los territorios, <http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=8073>

(2)Videos – Campaña – Spots. ¡NO MÁS INTRODUCCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES! Video 1 <http://www.youtube.com/watch?v=CPC-gfRloas> , Video 2 <http://www.youtube.com/watch?v=IH8WMKNXNNw> , Mapudungun <http://www.youtube.com/watch?v=0u349Xv1FDI&feature=youtu.be>

[index](#)

PUEBLOS EN MOVIMIENTO

- Campaña mundial para dismantelar el poder corporativo

Como parte de la Cumbre de los Pueblos organizada durante Río+20, se lanzó una Campaña Mundial contra las Transnacionales con la consigna "Desmantelamos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad". La campaña apunta a unir los cientos de campañas, redes, movimientos sociales y organizaciones que luchan contra los impactos de las empresas multinacionales sobre los derechos humanos, la naturaleza y el planeta.

Impulsadas por el afán de lucro, las empresas transnacionales violan sistemáticamente los derechos humanos y cometen crímenes económicos y ecológicos, incluso asesinatos, persecuciones y amenazas a sindicatos y líderes sociales y comunitarios de todo el mundo. En el contexto de la crisis global y con la complicidad de los Estados, que cumplen la función de crear una estructura de impunidad, dichas acciones se han intensificado. Las transnacionales están controlando el debate sobre la crisis y presentando propuestas que les permiten apropiarse de tierras y asegurarse la extracción de recursos naturales y producción de energía al menor costo posible.

El Llamado a la Acción Internacional afirma que "para enfrentar el poder corporativo y el sistema que lo protege y beneficia, es necesario y urgente dar una respuesta sistemática. Debemos unir nuestras experiencias y luchas, aprender colectivamente de nuestras victorias y fracasos, y compartir estrategias y análisis para poner fin a la

impunidad de las transnacionales. Las luchas de nuestras comunidades contra una transnacional pueden ser aún más efectivas si logramos unir las de otros pueblos en otros países, regiones o continentes”.

El texto completo del Llamado a la Acción Internacional está disponible en:
http://www.stopcorporateimpunity.org/?page_id=717&lang=es

Por más información sobre la campaña: <http://www.stopcorporateimpunity.org>

[index](#)

- Mirando al futuro: reforma agraria y defensa de la tierra y el territorio

Aliados de 26 países de Asia, África, América y Europa se reunieron en Sumatra Occidental, Indonesia, del 10 al 15 de julio de 2012, convocados por La Vía Campesina y la Campaña Global por la Reforma Agraria, para analizar el tema “Reforma Agraria y Defensa de la Tierra y el Territorio en el siglo XXI: desafíos y futuro”.

En plena emergencia mundial provocada por las múltiples crisis – alimentaria, climática, financiera, de pobreza y desempleo –, se evaluaron las estrategias y lecciones aprendidas en dos décadas de lucha por la reforma agraria, que la reciente avalancha de acaparamiento de tierras en todo el mundo ha vuelto urgente. El resultado fue la Declaración de Bukit Tinggi, que comienza a esbozar algunos elementos clave de una nueva visión de la reforma agraria y de la soberanía de los pueblos sobre sus territorios.

La declaración completa puede ser leída en inglés en:
<http://viacampesina.org/sp/http://viacampesina.org/sp/>

[index](#)

- Campaña contra FELDA, gigante del aceite de palma

Salva la Selva ha lanzado una campaña para exigir al Deutsche Bank que se desvincule del gigante malayo del aceite de palma, FELDA Global Ventures Holding. Esta compañía pretende obtener en la bolsa tres mil millones de dólares para establecer nuevas plantaciones de palma aceitera en Indonesia y África, comprando zonas de bosque tropical, destruyéndolas y convirtiéndolas en enormes monocultivos.

El Deutsche Bank, uno de los mayores bancos alemanes, aduce que sus actividades no tienen impactos sociales ni ambientales adversos, pero está ayudando a FELDA a conseguir inversores.

La campaña invita a firmar una carta en la que se pide al Deutsche Bank que se desvincule de FELDA y que se abstenga de financiar cualquier emprendimiento que conduzca al acaparamiento de tierras o a la deforestación.

Para participar, dirigirse a <https://www.salvalaselva.org/mailalert/878/el-deutsche-bank-saca-a-bolsa-la-deforestacion>

[index](#)

- La compañía minera Rio Tinto gana la medalla de oro del “maquillaje verde” 2012

Algunas de las empresas con peor reputación mundial, como Rio Tinto, Dow y BP, están patrocinando los Juegos Olímpicos, utilizándolos como pantalla para esconder las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometen en todas partes.

Auspiciada por Bhopal Medical Appeal, London Mining Network y UK Tar Sands Network, en abril se lanzó una nueva campaña para impedir que Dow, BP y Rio Tinto “ganaran” en los Juegos Olímpicos 2012, votando por la empresa “que mejor disimula su destrucción ambiental y perjudica a más comunidades, pretendiendo al mismo tiempo ser un ‘buen ciudadano corporativo’ por el hecho de patrocinar los Juegos Olímpicos”.

Y la medalla fue para... Rio Tinto, una enorme compañía minera británica que proporcionó el metal de las medallas olímpicas de Londres y está implicada en casos de violación de derechos humanos, contaminación, violación de los derechos indígenas y atroces relaciones laborales.

Tres cortas animaciones (en inglés) sobre BP, Dow y Rio Tinto se encuentran en: http://www.youtube.com/watch?v=6vPRu1bR5fc&feature=player_embedded (BP), http://www.youtube.com/watch?v=Wu1f6lbcik0&feature=player_embedded (Dow) y http://www.youtube.com/watch?v=li7wACA2TFI&feature=player_embedded#t=0s (Rio Tinto).

[index](#)

RECOMENDADOS

- **“El lado oscuro de los acuerdos de inversión”**, nuevo video de TNI que explica cómo estos acuerdos condicionan a los gobiernos frente al poder de las transnacionales, dejándolos sin margen de acción frente a abusos contra los derechos humanos, daños al medio ambiente, o incumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas. Ver el video en <http://www.tni.org/es/multimedia/video-el-lado-oscuro>

[index](#)

- **“Madera caída del bosque tropical: una opción ambientalmente sana y socialmente justa para producir madera”**, publicación reciente de Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica, donde se documentan las experiencias de aprovechamiento de madera caída en los bosques tropicales de Costa Rica. Puede

leerse en <http://coecoceiba.org/wp-content/subidas/2012/05/Madera-Caida-del-bosque-tropical-menor-res.pdf>

[index](#)
